

**Cronología**  
**Septiembre – diciembre 2003**

# **Levantamiento popular y luchas sociales en América Latina: del “octubre boliviano” a las protestas contra el ALCA<sup>1</sup>**

**José Seoane y Emilio Taddei**

---

## **Bolivia y la crisis en el área andina**

En septiembre se inicia en Bolivia el ciclo de confrontación social que, bautizado como la “Guerra del Gas”, habrá de culminar en una rebelión indígena y popular a mediados de octubre abriendo, tras la renuncia y fuga de Sánchez de Lozada y la designación parlamentaria de su vicepresidente Mesa, una transición aún en curso. Inscripta en un período de incremento del conflicto social y emergencia y consolidación de movimientos populares iniciado con la Guerra del Agua de 2000 en Cochabamba (Solón, 2003; ver el artículo de Raúl Prada Alcoreza en este OSAL) el levantamiento de octubre hunde sus raíces más próximas en las resistencias crecientes ante la política neoliberal impulsada por Lozada, aquel que supo acuñarlas en su primer mandato (1993-1997).

Estas resistencias habíanse dado cita en los enfrentamientos del febrero boliviano<sup>2</sup> que, señalando ya la fero-

cidad del régimen, había costado treinta y tres vidas<sup>3</sup> hasta detener la implementación de una reforma impositiva regresiva acorde a las políticas de ajuste fiscal recomendadas por el FMI. Así también estuvieron a la base del crecimiento electoral de partidos estrechamente vinculados a movimientos indígenas-campesinos<sup>4</sup> y que llevó a Evo Morales a un segundo lugar en la competencia presidencial en mayo de 2002.

Emergida de estos procesos, las jornadas de octubre en Bolivia guardan múltiples significaciones (Ver dossier sobre la "Guerra del gas" en este número). Entre otras cuestiones se ha señalado la articulación social de carácter nacional que, abigarrada y difusa, supo asumir la batalla por el gas primero y la demanda de renuncia del presidente después. En el marco de diferentes movilizaciones (entre ellas la del 19/9 impulsada por el MAS y la COB, entre otros, en oposición a la venta del gas) el bloqueo y la posterior represión en Warisata (20/9) habrá de encender un proceso de movilización y confrontaciones que se extiende rápidamente a lo largo de las barriadas más populares de la ciudad de El Alto en sucesivos "paros cívicos" hasta convertirse en un verdadero levantamiento popular. Barricadas, cortes de calles y rutas obstaculizan el abastecimiento de la ciudad de La Paz (particularmente del petróleo) y la acción de las fuerzas represivas. Entre los días 12 y 14 de octubre El Alto se convierte en el terreno de una verdadera batalla donde la extrema brutalidad de la represión policial y militar (que cobra en esa ciudad decenas de vidas de las más de 70 que habrán de contarse a nivel nacional) contrasta con la intensidad y solidaridad de una movilización social creciente. Esta experiencia popular señala, como otra de las características de las jornadas del octubre boliviano, la emergencia e incorporación al ciclo de la protesta de un movimiento territorial de base urbana, próximo a la ciudad capital, forjado por una población mayoritariamente joven, pobre y, en buena parte integrada por trabajadores precarios que supo constituirse amalgamada en su identidad y pertenencia indígenas (García Linera, 2003). Cercada y ocupada La Paz por bloqueos y movilizaciones que se extienden por todo el país, sumada la solidaridad de algunos sectores medios urbanos y perdido todo apoyo parlamentario e internacional, el 17 de octubre por la tarde el Goni, como se lo conocía popularmente, renunciará a la presidencia para refugiarse en Miami<sup>5</sup>.

La rebelión boliviana reactualiza en el final de 2003 el ciclo de crisis políticas (y más recientemente de crisis de la hegemonía neoliberal) que parece recorrer a lo largo de los noventa, con diferentes características e intensidades, distintos países latinoamericanos pero que sin duda alcanza en el diciembre argentino (2001) su más próxima y profunda manifestación. Sin embargo, su significación no se restringe a señalar una vez más el derrotero posible de la crisis de legitimidad del modelo neoliberal, justamente cuando la normalización institucional que se desarrolla en Argentina pareciera alejar de dicho país los fantasmas del masivo y callejero cuestionamiento social. Las demandas –comunes y específicas– condensadas en las jornadas de octubre (ver Silvia Escobar de Pabón

en este OSAL), la consistencia alcanzada por los movimientos populares, la fuerza de los intereses que propugnan la prosecución de las políticas neoliberales<sup>6</sup>, entre otras cuestiones, señalan que la crisis en Bolivia está lejos de haberse cerrado y se proyecta hacia el 2004<sup>7</sup>.

El país andino se convierte así en uno de los centros de la política continental de los gobiernos de la región. En el caso de los Estados Unidos este énfasis prolonga el fuerte apoyo norteamericano del que gozó el gobierno de Lozada hasta su renuncia así como la prolongada campaña promovida y financiada por sucesivos gobiernos de éste país para la erradicación del cultivo de coca y contra el movimiento cocalero –que supone entre otras cuestiones instrucción e intervención militar en la región del Chapare (Salazar Ortuño, 2003)– y contra la figura de Evo Morales después. También la resolución de la crisis boliviana entrará en la agenda de los gobiernos de distintos países del Cono Sur (particularmente de Brasil, Venezuela y Argentina). En un sentido similar el gobierno boliviano propugnará por concentrar en el problema del acceso al mar y las relaciones con Chile las demandas sociales planteadas. Pero la proyección continental del proceso en Bolivia está lejos de restringirse a las atenciones de estados y gobiernos. En el marco de las crecientes articulaciones sociales a nivel regional e internacional que vienen forjándose en el último lustro (de las cuales el Foro Social Mundial es una de sus expresiones más importantes, aunque no la única) diversas movilizaciones y actos de solidaridad habrán de tener lugar en la región (especialmente en Argentina, Ecuador y México) y a nivel internacional.

Por otra parte, la atención continental que despierta la transición en Bolivia está vinculada también a la medida que el rumbo que ésta adopte proyecta su sombra hacia el área andina atravesada por recurrentes inestabilidades y conflictividad social. Valga repasar brevemente la geografía sociopolítica de esa región durante este último cuatrimestre del año. En Perú el gobierno de Toledo arrastra una cada vez más baja popularidad, acosado por reiterados escándalos de corrupción y ante las demandas sociales de un efectivo cambio de rumbo respecto de las recetas neoliberales, en un cuadro de inestabilidad política que muestra a un aprismo y un fujimorismo remozados. Si bien en términos cuantitativos la conflictividad social descende, según los registros obtenidos por el OSAL, respecto del segundo cuatrimestre del año, la mayoría de los conflictos que se destacan (las protestas de los trabajadores de la construcción, los paros cívicos impulsados por diferentes Frentes Cívicos Regionales y las huelgas de médicos del sector público y de docentes universitarios) parecen obtener una relativa satisfacción a sus demandas. Por otra parte, en Ecuador, el gobierno de Lucio Gutiérrez avanza, en consonancia con las exigencias del FMI, con la privatización y ajuste del sector público al tiempo que profundiza su confrontación con el movimiento indígena (decreta la facultad para el Ejecutivo del nombramiento del Secretario del CONDENPE). En el marco de las protestas que des-

piertan estas políticas (y de un intenso conflicto de los maestros que se extiende casi a lo largo de los últimos dos meses del año), se incrementa y fortalece la convergencia de los movimientos populares en oposición al gobierno concluyendo el año con diferentes demandas de renuncia del presidente<sup>8</sup>. En este cuadro general debe mencionarse también la derrota electoral sufrida por el gobierno de Uribe en Colombia con el fracaso del referéndum así como con el triunfo de una oposición progresista en la capital del país (ver Alexander Reina en el presente OSAL). Finalmente en Venezuela, donde como en el caso anterior también disminuye la conflictividad social respecto del cuatrimestre pasado, la confrontación entre los proyectos bolivariano y liberal (López Maya, 2003) se expresará esta vez, frustradas las iniciativas de desestabilización y golpe de estado, en las campañas de recolección de firmas orientadas a obtener la convocatoria a diferentes referéndum revocatorios (entre otros, el del presidente Chavez) previstos en la nueva Constitución venezolana.

Estos procesos, disputas y estrategias se desarrollan en una Latinoamérica donde, en términos cuantitativos, la conflictividad social apenas desciende respecto de la registrada para el cuatrimestre anterior (de 2.323 registros a 2.126, un 8% menor) siendo un poco más numerosa en relación con la obtenida para los últimos cuatro meses del año 2002 (2.104 registros). Ciertamente, la evolución del número de conflictos protagonizados por una diversidad de organizaciones y movimientos sociales se distribuyen de manera irregular alrededor de los diecinueve países que considera el relevamiento del OSAL, mostrando un incremento importante en relación al cuatrimestre anterior en Bolivia, Argentina y Guatemala, y un descenso significativo en Colombia, Costa Rica (así como en la mayoría de los países Centroamericanos) y Brasil.

Similar comparación en relación a los sujetos sociales que impulsan y protagonizan estas protestas nos indica, particularmente, el crecimiento de las llamadas “protestas multi-sectoriales” (representan para el tercer cuatrimestre de 2003 un 78,5% más que para el segundo del año). Resulta claro que en ello contribuye decisivamente el proceso social boliviano de septiembre y octubre, pero incluso en algunos países donde el número total de conflictos no presenta demasiadas variaciones respecto del período anterior este tipo de protestas, se destacan (véase por ejemplo Uruguay y Panamá). Paralelamente, los asalariados de la administración pública también resaltan en la distribución y evolución de la conflictividad social durante este cuatrimestre. Y, en el mismo sentido, vale mencionar las movilizaciones inspiradas y articuladas con el llamado “movimiento antimundialización neoliberal”, especialmente aquellas que tienen lugar contra los acuerdos de liberalización del comercio y la movilidad de los capitales.

Estos tres señalamientos, que no agotan la riqueza del análisis de la conflictividad social para el período sobre el que volveremos más adelante, permiten dibujar los contornos,

las características y los resultados de una resistencia social a la profundización de las recetas neoliberales que supieron gozar de cierta credibilidad a principios de la década pasada. A contraluz marcan también, en otros casos, los avances de las políticas inspiradas en estas recetas. Intentaremos entonces en el presente artículo reseñar algunos de los casos destacados a nivel regional donde cobran relevancia éstas políticas y resistencias a lo largo de los últimos cuatro meses del año 2003, abordando luego un breve análisis respecto de los procesos de anexión económica y militarización social impulsados en la región para concluir con un panorama del año 2003 y las perspectivas que de éste pueden desprenderse.

### **Las protestas contra el “ajuste neoliberal”**

Las iniciativas de privatizaciones, ajuste fiscal, reforma tributaria regresiva y desmantelamiento del sector público (y particularmente del área social), piezas del cuerpo central de las recetas neoliberales, recorren buena parte de los países de la región a lo largo del último cuatrimestre del año. Prolongan así un proyecto que impulsado por las élites políticas y económicas desde hace por lo menos una década, parece acentuarse al tiempo que transcurre el 2003 al compás de las renegociaciones con el FMI y la sanción de los presupuestos fiscales para el año próximo. De la geografía social que adoptan las resistencias sociales que despiertan la implementación de estas políticas de “ajuste neoliberal”, en el último cuatrimestre, se destacan algunas experiencias además de las ya reseñadas anteriormente.

En primer lugar, el ciclo de protesta que a lo largo de septiembre agudiza la “batalla por la seguridad social” que recorre a la sociedad panameña desde mediados de año frente a las tentativas de la presidenta Moscoso de implementar una reforma regresiva del sistema jubilatorio y privatizar la Caja del Seguro Social (Ver artículo de Marco Gandásegui, h. en este número). La remoción del Director de la CJS, contrario a la política del gobierno, intensifica las resistencias que culminan en la significativa huelga del 23 de septiembre (y luego en la del 30 de octubre) impulsadas por el Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social. Las mismas no consiguen la reincorporación del Director destituido pero logran “rechazar y desmontar –momentáneamente– el proyecto de privatización” (Gandásegui, 2003).

Por otra parte, en Uruguay, a meses del intenso y prolongado conflicto de los trabajadores de la salud pública que culmina con “una importante victoria del movimiento sindical” (Zibechi, 2003), a principios de diciembre se realiza el referéndum alrededor de la llamada “ley ANCAP” que avanzaba con la privatización de la empresa petrolera estatal. Impulsado por la Comisión de Defensa de ANCAP, en el mismo se impone por el 62%

la derogación de la ley aprobada el pasado año, incrementando el cuestionamiento social al gobierno de Batlle y las expectativas de triunfo electoral de la coalición EP-FA (Ver artículo de Raúl Zibechi en este número).

Nos hemos referido ya, aunque brevemente, a los procesos desarrollados en Ecuador y Colombia. En el caso colombiano, luego de las intensas protestas que habían despertado las políticas de reestructuración y privatización de empresas públicas que el gobierno llevó adelante durante el pasado cuatrimestre (Taddei, 2003), hacia fines de octubre la iniciativa del referéndum impulsado por el gobierno de Uribe (que incluye, entre otras cuestiones, medidas de ajuste fiscal) fracasa ante una masiva abstención.

Por otra parte, en México, frente a la recurrente tentativa del gobierno de Fox de aprobar reformas legislativas en materia impositiva y de desregulación y privatización del sector eléctrico y petrolero estatal, se desarrollan diferentes conflictos y movilizaciones. Estas protestas alcanzaron su punto más álgido en la manifestación del 27 de noviembre convocada por un amplio arco social y político<sup>9</sup> y que a mediados de diciembre lleva a algunas de estas organizaciones a conformar un frente sindical, campesino, social y popular. Al calor de estas manifestaciones en la última parte de diciembre naufraga en el parlamento el intento de aprobar el proyecto de reforma tributaria gubernamental. En este terreno, como en lo que respecta a la privatización eléctrica y petrolera, el gobierno se vio imposibilitado de avanzar con la rapidez y frontalidad ambicionada. Pocos días después, el 1° de enero de 2004, habrá de cumplirse diez años del levantamiento zapatista, que a partir de agosto, y en el marco de un hospedaje militar que no cede, ha dado nacimiento, profundizando la experiencia de constitución de los municipios autónomos en Chiapas, a las llamadas Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles (ver dossier sobre el zapatismo en este número).

La política de "ajuste neoliberal" y las resistencias que la confrontan atraviesan también otros países de la región. En

***"Las iniciativas de privatizaciones, ajuste fiscal, reforma tributaria regresiva y desmantelamiento del sector público (y particularmente del área social), piezas del cuerpo central de las recetas neoliberales, recorren buena parte de los países de la región a lo largo del último cuatrimestre del año"***

este sentido, vale señalar las protestas y manifestaciones en Honduras –impulsadas por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular– frente a distintos proyectos de ley que profundizan el ajuste del sector público y las privatizaciones (varios de ellos son finalmente aprobados), el intenso conflicto protagonizado por los estudiantes universitarios en Nicaragua en reclamo del cumplimiento del 6% del PBI para el presupuesto de las Universidades (que se destaca de las protestas que despierta diferentes leyes de ajuste fiscal que el gobierno impulsa, en su mayoría aprobadas hacia fin del año), las movilizaciones y la huelga general de diez días que los maestros en Paraguay llevan adelante contra la reforma del régimen jubilatorio impulsado por el gobierno, la escalada de protestas de los trabajadores de la salud en Chile (que culmina con los paros nacionales del 3 y 16 de diciembre) contra la reforma legislativa que sobre el sector promueve la Concertación, las huelgas y conflictos llevados adelante por los trabajadores de la salud y los docentes universitarios en Perú. A estas breves referencias habría que agregar la significativa huelga nacional con movilización que tiene lugar en República Dominicana a principios de noviembre (reprimida brutalmente por el gobierno) que cristaliza un proceso de protestas que viene intensificándose en el último período contra los apagones, el alza de precios y la política económica oficial. Por otra parte en Brasil, la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Lula obtiene media sanción parlamentaria, produciéndose hacia el final del año la expulsión del PT de aquellos parlamentarios que votaron contra la ley gubernamental de reforma de las jubilaciones aprobada en el cuatrimestre anterior.

De esta multiplicidad de experiencias de resistencias sociales frente al “ajuste neoliberal” que hemos brevemente reseñados, en sus semejanzas y diferencias, hay cuatro cuestiones que merecen ser resaltadas y que, en cierta medida, parecen profundizar una tendencia que hemos señalado ya en otras oportunidades. En primer lugar la forma que asume, en buena parte de ellas, la protesta que, particularmente bajo las ocupaciones de lugares de trabajo o edificios públicos y el bloqueo prolongado de carreteras y calles, parece caracterizarse por el desarrollo de procesos colectivos de apropiación territorial. En segundo lugar, estos conflictos son confrontados por las élites políticas, en muchos casos, por una intensa represión, acompañados también por la sanción de legislaciones cada vez más duras. En particular sobre este diagrama de criminalización de los movimientos populares hemos de concentrarnos en el siguiente punto. En tercer lugar, es importante señalar el papel protagónico que le cabe en muchas de estas resistencias a las organizaciones sindicales de trabajadores del sector público particularmente afectadas por las políticas de ajuste. En algunos casos el desarrollo de estos conflictos despliegan una extensión social y geográfica mucho más amplia, siendo capaces de incrementar su capacidad de interpelación a los poderes públicos en la medida que amplía sus horizontes reivindicativos y, como señala Zibechi para el caso de Uruguay, resultando capaz de obtener triunfos. Por último, la utilización y presencia en la programática de estos movimientos de instrumentos como el referéndum y/o la consulta popular. De la

demanda del referéndum sobre el gas y la convocatoria a asamblea constituyente en Bolivia a la exigencia de un plebiscito vinculante sobre el ALCA (que impulsan las coaliciones sociales constituidas en la oposición a dicho acuerdo a nivel continental), pasando por los casos tratados anteriormente, la demanda de una democratización radical de la gestión pública bajo las formas de lo que ha dado en llamarse “democracia participativa” parece constituirse cada vez más en un acervo de la experimentación popular contra las políticas neoliberales.

Estos señalamientos no pretenden sintetizar el conjunto de la conflictividad social del período bajo análisis. De ésta se destacan también, entre otros procesos, las ocupaciones y protestas que lleva adelante el MST en Brasil en reclamo de la reforma agraria y contra la persecución y represión que castiga al movimiento, el crecimiento del conflicto de los asalariados y desocupados en Argentina, y las crecientes manifestaciones en Haití en oposición al gobierno de Aristide (Ver artículo de Suzy Castor en este número).

### **Cancún, Miami y el CAFTA: hegemonía norteamericana y experiencias de resistencia social al libre comercio y a la militarización en América Latina**

En el marco de la política hemisférica hacia América Latina desplegada por Estados Unidos –que se materializó en el orden internacional en 2003 con la intervención y ocupación militar de Irak– el gobierno del presidente Bush desplegó una sostenida ofensiva diplomático-comercial. Esta se centró en la concreción de tratados bilaterales de libre comercio y en la aceleración de las negociaciones para garantizar la entrada en vigencia del ALCA en el 2005. En el plano militar y represivo esta estrategia fue acompañada por una mayor presencia e influencia militar norteamericana (fundamentalmente en la región andina) y por la agudización de la criminalización social de la protesta en los países latinoamericanos, crecientemente asociada a la lucha contra el “narcoterrorismo” promovida por el gobierno norteamericano.

Una lectura provisoria de la acción y de los resultados de la “diplomacia de negocios” norteamericana en su tentativa de construcción de una zona de libre comercio desde Canadá hasta Argentina, permite observar –más allá de los avances efectivos de la misma– el surgimiento de tensiones y obstáculos que deben entenderse en el contexto de las transformaciones sociales y políticas ocurridas durante el último año en América Latina. Estas cuestiones se manifestaron en el rotundo fracaso de la V Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tuvo lugar en el mes de septiembre en Cancún, México (AA.VV., 2003[a]) y en las negociaciones desarrolladas durante la Cumbre Ministerial del ALCA realizada hacia finales de noviembre en Miami, Estados Unidos.

Estas dificultades resultan, por un lado, de la creciente impugnación y deslegitimación de los procesos de liberalización comercial manifestada por numerosos movimientos sociales y redes del continente que se oponen a los tratados de “libre comercio”, presentados como una tentativa de dar una respuesta a la crisis económica y social y a la deslegitimación creciente de las políticas neoliberales. En Cancún la acción directa y la presión de las organizaciones sociales sobre sus respectivos gobiernos fue fundamental en el fracaso del encuentro y la deslegitimación de la OMC (Bello, 2003). Por otro lado, cabe señalar que los Estados Unidos debieron afrontar en dichas cumbres las reservas expuestas por algunos gobiernos latinoamericanos (particularmente, Brasil y Argentina) en relación a cuestiones relativas, entre otras, al acceso a los mercados, a los subsidios a la agricultura, a las compras del sector público, a los servicios, a la propiedad intelectual y para la conclusión de las negociaciones de la “ronda de Doha” de la OMC. Asimismo, el gobierno venezolano reiteró su oposición al ALCA a la vez que reivindicó un proyecto alternativo de integración a través de la propuesta de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe, ALBA.

En contraste con las posiciones de las redes y movimientos sociales que hicieron oír su voz contra el “libre comercio”, los conflictos y tensiones que entorpecen las negociaciones no significaron, sin embargo, en ningún momento, un cuestionamiento por parte de los gobiernos latinoamericanos a los principios de liberalización comercial que guían las negociaciones de la OMC y el proyecto de integración continental en las Américas. Estas fricciones y la reformulación en las negociaciones del ALCA (conocida ahora como “ALCA light”) deben ser entendidos más bien como una tentativa de algunos gobiernos de la región (fundamentalmente Brasil y Argentina) de avanzar en lo inmediato de manera parcial en las metas fijadas al inicio del proceso y obtener mejores condiciones de acceso de algunos productos latinoamericanos al mercado norteamericano, de forma tal de garantizar la competitividad de algunos sectores claves de las economías nacionales.

En este contexto debe entenderse la activa participación de la diplomacia brasileña en la conformación del “Grupo de los 22” en la reunión de la OMC, en la tentativa de conformar un frente de países agroexportadores, al cual se integraron en un primer momento diversos países de la región. También la intensa actividad diplomático comercial que –liderada por Brasil– desplegaron los países del MERCOSUR (incorporación de Perú como miembro asociado y suscripción de un acuerdo de libre comercio con la Comunidad Andina de Naciones –CAN– que regirá a partir de abril de 2004), parece apuntar al intento de consolidar un bloque regional que permita mejores condiciones de negociación con los Estados Unidos. Por su parte, el gobierno de Bush intentó en la Cumbre “extraordinaria” de las Américas, que se realizó en Monterrey, México, en enero de 2004, ratificar el compromiso de concreción del ALCA en enero de 2005.

La consolidación y difusión a lo largo de 2003 de la campaña continental contra el ALCA, el “libre comercio” y la militarización en América Latina impulsada por movimientos sociales y redes de la región refleja también el creciente cuestionamiento popular al modelo neoliberal. Durante el año, y a diez de entrada en vigencia del NAFTA, las protestas impulsadas en México por la coordinación campesina “El Campo no aguanta más” han servido para denunciar las terribles consecuencias económicas, sociales y culturales que este acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá han tenido en la sociedad mexicana, en particular sobre los pueblos originarios y los pequeños productores agrícolas, deslegitimando así los pretendidos beneficios de las políticas de liberalización comercial.

En el período tratado la lucha contra el “libre comercio” cobró un gran impulso y visibilidad pública con las acciones de protesta y la presión sobre los gobiernos nacionales y la opinión pública ejercida en el mes de septiembre por las redes y movimientos en Cancún. Como señalamos anteriormente, estos contribuyeron de manera decisiva al fracaso de dicha cumbre y al *descarrilamiento* de la OMC. Las voces del movimiento continental contra el ALCA se hicieron oír también en noviembre en Miami. En ambos casos los movimientos campesinos de la región tuvieron una destacada participación. Este descontento también se hizo visible en el marco del contraforo “Otro mundo es posible” que tuvo lugar en enero de 2004 en Monterrey, en paralelo a la cumbre de presidentes de las Américas y que rechazó una vez más el proyecto del ALCA.

En relación a las acciones contra el ALCA cabe señalar la realización en Argentina a finales de noviembre de una Consulta Popular sobre el ALCA, la Deuda Externa y la Militarización organizada por la Autoconvocatoria NO AL ALCA y mediante la cual el 96% de los 2.250.000 votantes se expresó en contra del proyecto de integración hemisférica impulsado por Estados Unidos. El 15 de diciembre tuvo lugar en Montevideo, en paralelo a la XXV Reunión del Consejo del MERCOSUR, la V Cumbre Sindical del MERCOSUR que, bajo la consigna “Ahora MERCOSUR, NO al ALCA”, exigió a los presidentes de los países reunidos realizar consultas vinculantes en torno al proyecto de integración continental y exigió un cambio de rumbo en relación a las lógicas fiscal y monetarista que guiaron la construcción del bloque económico del Cono Sur en los años noventa. A mediados de diciembre en San Pablo se realizó un plenario con participación de doscientos delegad@s de organizaciones sindicales y populares y jóvenes de distintos países del continente quienes constituyeron el Comité de Enlace de los Trabajadores de las Américas en la lucha por frenar el ALCA. En Caracas, la realización del I Congreso Bolivariano de los Pueblos a fines de noviembre, culmina su declaración con un explícito rechazo al modelo neoliberal, al ALCA y a las políticas predatoras de los organismos internacionales. Asimismo, las campañas y confluencias contra el ALCA se ven reforzadas con la realización de Foros Sociales nacionales que tienen lugar en Uruguay (octubre) y en Brasil y Paraguay (noviembre).

***“En el período tratado la lucha contra el ‘libre comercio’ cobró un gran impulso y visibilidad pública con las acciones de protesta y la presión sobre los gobiernos nacionales y la opinión pública ejercida en el mes de septiembre por las redes y movimientos en Cancún”***

Las protestas y manifestaciones contra el tratado de libre comercio EEUU-Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés) se prolongaron y cobraron un nuevo impulso en ocasión de las últimas reuniones de negociación entre los gobiernos de la región y los Estados Unidos, iniciadas a fines de 2003. Durante los meses de septiembre y octubre se registran importantes marchas de protesta contra el CAFTA en Costa Rica, Nicaragua (convocadas por el Movimiento Social Nicaragüense) y El Salvador, donde el Bloque Popular Social vehiculiza el repudio a dicho tratado. Estas protestas no lograron sin embargo impedir su concreción y el mismo fue rubricado por Estados Unidos, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua el 17 de diciembre. Luego de la prolongación de las negociaciones entre Costa Rica y Estados Unidos hasta inicios de 2004, a finales de enero dicho país se incorpora al CAFTA.

La firma del CAFTA es el dato más relevante en relación a la política comercial norteamericana en la región durante el último cuatrimestre del año y resulta un paso significativo en la ampliación de la esfera de influencia del capital norteamericano en Centroamérica. La conclusión de las negociaciones en torno al CAFTA van acompañadas por la tentativa de un reforzamiento del Plan Puebla Panamá, a través de la promoción de inversiones en infraestructura y de la presión norteamericana para lograr que los países involucrados en el CAFTA se retiren del G22 conformado en Cancún.

En el mismo sentido, la aprobación por parte del poder legislativo chileno del TLC entre ese país y Estados Unidos y la entrada en vigencia del mismo a partir del 1° de enero de 2004, y el inicio de negociaciones para la firma de un TLC entre Colombia y el gobierno norteamericano se inscriben en la estrategia norteamericana de impulsar tratados bilaterales para ir cristalizando, en paralelo a las negociaciones multilaterales, un “ALCA de hecho”.

Por otra parte, las iniciativas de Estados Unidos tendientes a consolidar su influencia militar en la región andina cobran un nuevo impulso durante los últimos cuatro meses de

2003. En esta zona, particularmente convulsionada por las protestas sociales que, como en Bolivia, pueden desembocar en insurrecciones populares; la lucha contra el “narcoterrorismo” y la erradicación de los cultivos de coca en el marco del “Plan Colombia” y del “Plan Andino”, son el pretexto para promover la militarización social e intentar legitimar una política represiva que se ha acentuado de forma alarmante desde 2002.

En Ecuador, donde la política exterior del presidente Gutiérrez aparece cada vez más aliada con los intereses norteamericanos, se realiza un encuentro en el país andino de militares del Comando Sur para supervisar las tareas del Plan Colombia y coordinar el trabajo de espionaje en la base militar de Manta. Dicho país firma un convenio de cooperación económica con Estados Unidos con el fin de controlar la producción y el tráfico de drogas, el entrenamiento de policías y las Fuerzas Armadas y el lavado de dinero. También el presidente Gutiérrez intensifica la persecución y represión de dirigentes sociales, como lo manifiestan tanto la detención de un dirigente de ECUARUNARI (integrante de la CONAIE arrestado por “ofender” la investidura presidencial) como la represión contra la huelga de maestros<sup>10</sup>. El gobierno colombiano aprueba la inmunidad para las tropas norteamericanas que operan en su territorio y obtiene en contrapartida la entrega de diferentes préstamos de ayuda militar y financiamiento del Plan Colombia por parte de Estados Unidos. En Perú, bajo el pretexto de ayuda humanitaria y médica, se produce el ingreso de tropas norteamericanas en la ciudad de Iquitos al mismo tiempo que se anuncia la instalación de un centro de coordinación antinarcóticos en ese país.

La brutal y sangrienta represión en Bolivia, durante la cual fueron asesinadas más de setenta personas, resulta un paradigmático y triste caso de la preocupante escalada represiva que azota a las protestas sociales en América Latina. La represión contra la insurrección del pueblo boliviano durante la “Guerra del Gas” no logró sin embargo impedir las multitudinarias marchas y protestas de los movimientos indígenas, del movimiento obrero y de sectores urbanos que culminaron con el derrocamiento del presidente pronorteamericano Gonzalo Sánchez de Lozada.

Sin pretensión de exhaustividad cabe señalar, en Centroamérica, el inicio del programa militar Jaguar Maya en Guatemala, impulsado por Estados Unidos y que tiene por objetivo mejorar las tácticas de combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, como también la vigencia del plan “Mano Dura” implementado por el presidente salvadoreño desde el cuatrimestre anterior. Asimismo el conflicto estudiantil en Nicaragua fue duramente reprimido por el gobierno, quien acusó de “terroristas” a los manifestantes universitarios.

La consolidación de la política de represión social fue acompañada en el último año de una creciente cooperación en materia de seguridad entre numerosos gobiernos latino-

americanos y el gobierno de Bush. A los hechos consignados en este y en números precedentes del *OSAL*, cabe agregar la presencia creciente de la lucha contra el terrorismo como objetivo presente en las declaraciones finales de los encuentros, cumbres y/o conferencias intergubernamentales en la región. Dichos acuerdos funcionan como un elemento de legitimidad de la persecución y encarcelamiento de dirigentes sociales practicados por numerosos gobiernos y para justificar la acción de personal militar y/o de inteligencia norteamericano que, como en el caso mexicano, comenzó recientemente a practicar controles “preventivos” en los aeropuertos de dicho país.

### **2004: desafíos de los movimientos populares frente al ALCA y el “neoliberalismo armado”**

El contexto regional aparece signado en el 2003 por la perdurabilidad de los efectos de la profunda crisis y recesión económica que afectaron a la mayoría de los países de la región durante 2001 y 2002. Frente a la profundización del ciclo de protestas, resulta preocupante la tentativa de la mayoría de los gobiernos de dar continuidad al rumbo neoliberal bajo la lógica de la militarización social y la liberalización comercial promovida por Estados Unidos, como resortes privilegiados de “resolución” de la crisis.

En este escenario la dinámica de la protesta social prolonga algunas de las tendencias reseñadas durante 2002. En relación al número de conflictos registrados por el *OSAL* para todo el año 2003, estos resultan similares a los del año precedente (6.649 y 6.744 respectivamente). Su distribución en términos de los sujetos sociales que los protagonizan tampoco parece mostrar grandes diferencias entre ambos períodos, en los que se destacan la participación de los asalariados públicos (educación y salud fundamentalmente), de los sectores campesinos e indígenas y la difusión de protestas multisectoriales que –como en el caso de Bolivia en el cuatrimestre analizado– ponen en crisis la legitimidad política de la “gobernabilidad neoliberal”. La distribución geográfica de los conflictos en 2003 también se asemeja a la del año precedente: se destaca la preponderancia de la región andina donde se concentra el 40,64% de las protestas, registrándose un incremento del 3,44% respecto a 2002. La región norte y la sur agrupan respectivamente 34,85% y 24,49% del total de conflictos.

La crisis de legitimidad del régimen neoliberal también se ha expresado a lo largo del año, como en las elecciones presidenciales argentinas y en las recientes elecciones regionales y municipales en Colombia, en el triunfo de coaliciones y/o partidos políticos que manifiestan, al menos discursivamente, un cuestionamiento al rumbo ortodoxo de las políticas económicas. Sin embargo la profundización del modelo neoliberal del gobierno ecuatoriano luego de la ruptura con el movimiento indígena de ese país, es

quizás el ejemplo más claro de la falta de decisión, más allá de la discursividad electoral, de ensayar un cambio profundo en el modelo económico dominante. El mantenimiento de las líneas generales del recetario de la ortodoxia económica durante el primer año del gobierno del presidente Lula en Brasil y la perdurabilidad en la Argentina de las políticas regresivas de concentración del ingreso inherentes al patrón de acumulación dominante, ponen de manifiesto los límites de estas experiencias y plantean nuevos desafíos para los movimientos populares de la región.

La tentativa de materializar las aspiraciones hegemónicas norteamericanas a través de la concreción del ALCA a partir de 2005, será un elemento de significativa importancia en la agenda política latinoamericana durante el año que acaba de iniciarse. La consolidación de las campañas y convergencias continentales a lo largo del último año son una muestra de la importancia creciente que los movimientos sociales latinoamericanos han asignado a la lucha contra el "libre comercio" y la militarización a escala continental. El fortalecimiento de las experiencias de convergencia y su capacidad de articulación con las luchas que se libran en el ámbito nacional contra la aplicación de las políticas neoliberales, resultarán decisivos en este sentido. En este contexto cobrarán particular relevancia los encuentros y acciones ya programados, entre los que se destacan el III Encuentro Hemisférico de lucha contra el ALCA en enero en Cuba, la IV Conferencia de Vía Campesina, en junio en Brasilia, y la realización del primer Foro Social Continental de las Américas en el mes de julio en Quito, Ecuador. Estos y otros espacios de debate y movilización aparecen en el horizonte inmediato como grandes oportunidades para promover y consolidar los espacios de autonomía y autoactividad de los movimientos y fortalecer el debate democrático en torno a la búsqueda y concreción de alternativas que permitan avanzar hacia una integración solidaria de los pueblos de las Américas.

## Bibliografía

- AA.VV. 2003[a] "El 'descarrilamiento' de la OMC y perspectivas frente al ALCA", en *OSAL* (Buenos Aires) Nº 11, mayo-agosto.
- AA.VV. 2003[b] "El febrero boliviano. Crisis política y revuelta popular", en *OSAL* (Buenos Aires) Nº 10, enero-abril.
- Algranati, Clara 2003 "Luchas sociales y 'neoliberalismo de guerra' en América Latina", en *OSAL* (Buenos Aires) Nº 10, enero-abril.
- Bello, Walden 2003 "El significado de Cancún", en *OSAL* (Buenos Aires) Nº 11, mayo-agosto.
- Gandásogui, Marco 2003 "La batalla por la seguridad social domina los movimientos sociales en Panamá durante el 2003", en *OSAL* (Buenos Aires) Nº 12, septiembre-diciembre.
- García Linera, Álvaro 2003 *El Alto insurrecto* (La Paz) mimeo.
- López Maya, Margarita 2003 "Insurrecciones de 2002 en Venezuela. Causas e implicaciones", en Seoane, José (comp.) *Movimientos sociales y conflicto en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).
- OSAL 2003 *Informe sobre la cronología del conflicto social en Bolivia (septiembre-diciembre)* (Buenos Aires).
- Salazar Ortuño, Fernando 2003 "El Plan Dignidad y el militarismo en Bolivia. El caso del Trópico de Cochabamba", en Seoane, José (comp.) *Movimientos sociales y conflicto en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).
- Solón, Pablo 2003 "Radiografía de un febrero", en *OSAL* (Buenos Aires) Nº 10, enero-abril.
- Taddei, Emilio 2003 "Las protestas sociales en el espacio urbano: trabajadores asalariados y convergencias sectoriales", en *OSAL* (Buenos Aires) Nº 11, mayo-agosto.
- Zibechi, Raúl 2003 "Fuerza en la debilidad: éxitos del movimiento sindical uruguayo", en *OSAL* (Buenos Aires) Nº 12, septiembre-diciembre.

## Notas

1 El presente texto que intenta servir de introducción a la lectura de las cronologías del conflicto social en Latinoamérica para el tercer cuatrimestre de 2003, no podría haber sido escrito sin contar con los informes cuatrimestrales elaborados por los jóvenes investigadores del equipo del OSAL. Asimismo los aportes e intercambios con Clara Algranati resultaron, como siempre, indispensables para la redacción de esta síntesis. En el mismo sentido, queremos mencionar los comentarios de Ivana Brighenti y su dedicación en la corrección del texto. Por último también queremos agradecer las correcciones y observaciones realizadas por Miguel Ángel Djanikian.

2 Ver, entre otros, el dossier sobre el febrero boliviano, publicado en el *OSAL* (AA.VV., 2003[b]).

3 Las jornadas del 12 y 13 de febrero en Bolivia culminaron con un saldo de, por lo menos, treinta y tres muertos y 189 heridos (Solón, 2003).

4 Nos referimos al Movimiento Al Socialismo (MAS) cuyo referente es Evo Morales y al Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) que inspira Felipe Quispe. Para un análisis de la constitución del MAS consultar en este OSAL el artículo de Pablo Stefanoni.

5 Para una cronología del proceso ver el artículo de Pablo Mamani Ramirez en este número de la revista y OSAL (2003).

6 Además de las cuestiones planteadas por el movimiento de octubre (referéndum sobre el gas, convocatoria a Asamblea Constituyente), el gobierno de Mesa afronta en los próximos meses (como Lozada en febrero del pasado año) la necesidad de incrementar los recursos fiscales si se trata de cumplir con los compromisos asumidos ante el FMI.

7 Vale señalar que para marzo están previstas las elecciones municipales a nivel nacional.

8 A inicios de diciembre un amplio arco social y político conforma un "Frente de Unidad Nacional" de oposición a la política del gobierno; hacia el final del mismo mes la CONAIE pide la renuncia del presidente, y otras organizaciones sociales plantean la disolución de los tres poderes del Estado.

9 Entre las organizaciones sociales que convocan a dicha movilización se cuentan el Frente Sindical Mexicano (FSM), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Promotora de Unidad Nacional, en el terreno sindical, El Barzón, el Consejo Agrario Permanente y la coalición "El Campo no Aguanta Más" quien protagonizó las multitudinarias protestas campesinas a principios de 2003.

10 En este contexto, con enorme preocupación, debe señalarse el atentado sufrido por Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, y su familia el 1º de febrero, así como el asesinato el 30 de enero de Patricio Campana, auditor de Petroecuador, que se encontraba investigando el robo de combustible de la empresa.